



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dos (02) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: SONIA DIAZ MANTILLA
Demandados: ACP COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. Y COLFONDOS S.A.
Radicado: 05001 31 05 020 2019 00472 01
Sentencia: S-209

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el **recurso de apelación interpuesto por la ACP COLPENSIONES, al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de ésta en los aspectos no recurridos**, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín el día 02 de diciembre de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

SONIA DIAZ MANTILLA demandó a PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y la ACP COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia de

la afiliación a PROTECCIÓN S.A. y a COLFONDOS S.A.; en consecuencia, se ordene a las administradoras privadas trasladar íntegramente el saldo de la cuenta de ahorro, corrigiéndose su estado de afiliación relacionando los tiempos cotizados con su período de valoración económica y rendimientos a COLPENSIONES, y se ordene a esta misma entidad, a recibir los dineros trasladados por las administradoras y reactivar la afiliación. Costas.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones que nació el 16 de diciembre de 1964; que cuenta con 462 semanas en el Régimen de Prima Media – RPM-; que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 cotizaba al sistema general de pensiones, ya que laboraba desde 1988; que al momento del traslado a PROTECCIÓN S.A. no se le brindó información suficiente y clara del fondo, como tampoco se le hizo un estudio previo de las ventajas y desventajas de permanecer o trasladarse de régimen; que no hay prueba de la información dada; que se fue a vivir al exterior sin descuidar sus aportes a la seguridad social; que se trasladó a COLFONDOS S.A. el 28 de febrero de 2002, bajo el mismo argumento de pensionarse más joven, cuando quisiera y con más dinero; que no se le suministró más información al respecto, como tampoco se le brindó prueba de la información brindada; que cuando regresó al país solicitó a COLFONDOS S.A. la proyección pensional arrojando como resultado una mesada de \$1'411.470 en el RAIS y \$4'709.148 en el RPM; y que presentó solicitud de traslado ante COLPENSIONES la cual fue negada.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES admitió la fecha de nacimiento de la demandante; que cuenta con 462 semanas en Colpensiones; que antes de la entrada en vigencia de la ley 100 ya cotizaba al sistema y que laboraba desde 1988; es cierta la solicitud de traslado elevada ante

Colpensiones, la cual fue negada. Que no le constan los demás hechos, ya que corresponden a hechos dirigidos en contra de un tercero ajeno a Colpensiones. Se opuso a las pretensiones y como excepciones propuso inexistencia de la obligación, imposibilidad de aplicar precedente judicial y a inversión de la carga de la prueba, buena fe, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

PROTECCIÓN S.A. acepta la fecha de nacimiento de la demandante, pero no le constan las semanas que tiene en Colpensiones; que es cierto la afiliación de la demandante ante PROTECCIÓN S.A. el 13 de noviembre de 1998, como también es cierto que se le indicó que se podría pensionar más joven por ser características de RAIS, pero no es cierto que se le dijo que se podría pensionar cuando quisiera, o que se pensionaria con más dinero, toda vez que al momento de la afiliación se realizan las respectivas proyecciones pensionales verbales en ambos regímenes; niega que no se le haya realizado un estudio previo y particular; no es cierto que se pueda hablar de ventajas o desventajas por ser regímenes excluyentes; que el deber de información se debe valorar conforme el momento histórico en que debía cumplirse y que no le constan los hechos que se refieren a una entidad ajena. Se opuso a las pretensiones, toda vez que el acto fue existente y válido. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, traslado de aportes a Colfondos, traslado y movilidad dentro del RAIS, aprovechamiento indebido de los recursos del sistema, inexistencia de la obligación de devolver comisión de administración y prima del seguro previsional.

COLFONDOS S.A. señaló que acepta la afiliación a este fondo, pero niega que la información brindada al demandante no haya sido integral y completa, pues la actora tomó la decisión de trasladarse luego de habersele dado una adecuada asesoría; tampoco es cierto que no se le haya realizado una proyección pues los asesores de COLFONDOS S.A. son personas capacitadas, aunado a eso no obran soportes de la asesoría brindada, por lo que para la fecha del traslado no era

obligación de los fondos conservar por escrito la asesoría brindada; que frente a la proyección realizada no es cierto como se narra en la demanda, ya que no es una situación jurídica concreta ni definitiva por ser cálculos efectuados en fecha presente y con base a tasas fluctuantes; y que no le constan los demás hechos por ser situaciones de la demandante y terceros. Se opuso a las pretensiones. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de legitimación por pasiva, buena fe, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación, ratificación de la afiliación, prescripción de la acción, compensación y pago.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2022, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, tomó las siguientes decisiones: 1) **DECLARÓ** la ineficacia del traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual, por falta de consentimiento informado, lo que llevó a un error en el consentimiento al afiliarse a PROTECCIÓN S.A.; 2) **DECLARÓ** que la afiliación al Régimen de Prima Media de la demandante no ha tenido solución de continuidad en el tiempo que ha estado activamente vinculado al Sistema General de Pensiones; 3) **CONDENÓ** a COLFONDOS S.A. que traslade a COLPENSIONES el 100% de los aportes de la demandante y cualquier otro valor que se encuentre en su cuenta de ahorro individual, incluidos rendimientos, así como los bonos pensionales, asumiendo con cargo a su propio patrimonio los conceptos de comisiones de administración, seguros previsionales, lo descontado al fondo de garantía de pensión mínima desde la fecha efectiva de la afiliación al RAIS hasta la fecha que se haga efectivo el traslado de régimen; 4) **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES con cargo a su propio patrimonio, los conceptos de comisiones de administración, valor de las pólizas previsionales, lo descontado para el fondo de garantía de pensión mínima, durante el tiempo en que la actora estuvo afiliada a esta administradora; 5) **CONDENÓ** a COLPENSIONES a recibir los aportes de las

administradoras de fondos privados, y a tener en cuenta el tiempo cotizado en el RAIS por la actora como semanas cotizadas que deberán reflejarse en la historia laboral; y 6) **CONDENÓ** en costas a las AFP PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con lo decidido, la apoderada de COLPENSIONES presentó recurso de apelación para que revoque la sentencia en respecto de la declaratoria de ineficacia pues COLPENSIONES es un tercero ajeno de los negocios jurídicos celebrados entre los fondos privados y el demandante, por lo que no puede verse perjudicada con las decisiones que este tome, ya que su afiliación se realizó de forma libre y voluntaria, por lo que sus manifestaciones se encuentran infundadas y no existió ningún tipo de dolo, ni culpa y tampoco se ejerció ningún tiempo de fuerza que lo llevara a que se presentara una ineficacia, por lo que resulta adversa una condena a Colpensiones cuando no tuvo parte alguna. Aún más, pensionar a un afiliado que no cotizó al RPM y que fue trasladado, descapitaliza el RPM, por aportes de los fondos privados los cuales se ven afectados por el paso del tiempo; que conforme al interrogatorio de parte se denota que si se le dio a la demandante la suficiente información por parte del RAIS, contando con el ánimo de continuar afiliada al fondo privado y no a Colpensiones, y tan solo la inconformidad monetaria es la razón de la demanda; que en cuanto al traslado de los rubros, solicita que se sostengan los mismos, y que no se le condene en costas en la segunda instancia, pues se evidencia que siempre ha actuado de buena fe y que no ha tenido injerencia en los actos de las codemandadas para la declaratoria de ineficacia.

Se conoce igualmente del asunto por **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Por parte de COLPENSIONES, se allegaron alegatos de conclusión solicitando se revoque la orden de recibir en calidad de afiliada a la demandante, toda vez que no es procedente recibir y pensionar a afiliados que deciden de forma libre cambiar de régimen y fondo; que es extraño cuando solo se está a punto de pensionarse deciden indagar sobre qué régimen es más beneficioso, solicitando el traslado cuando hace muchos años habían dejado de cotizar en el RPM; es de anotar además que la demandante supera la edad permitida para trasladarse de régimen, hacerlo descapitalizaría al RPM un más cuando la inconformidad es netamente económica; que en caso de que se decida confirmar la decisión, solicita se ordene las devoluciones de los aportes sin descuento alguno, incluidos, pagos de administración, primas de seguros previsionales, aclarando que estos valores deben ser indexados o se permita realizar un cálculo de equivalencias y que no sea condenadas en costas, ya que siempre actuó de buena fe.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en su favor conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** SONIA DIAZ MANTILLA nació el 16 de diciembre de 1964; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y comenzó a realizar cotizaciones desde el 26 de abril de 1988, acumulando en esa entidad un total de 461 semanas; **iii)** que el 13 de noviembre de 1998 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP PROTECCIÓN S.A.¹; **iv)** y

¹ Folio 29 del expediente digitalizado

que el 28 de febrero de 2002 realizó traslado hacia COLFONDOS S.A.², donde está actualmente.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993³, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

² Folios 55 del expediente digitalizado

³ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias

de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que los fondos privados brindaron, en los momentos del traslado, una información integral de las condiciones

subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, los Fondos privados incumplieron con su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que su traslado a PROTECCIÓN S.A. se dio cuando trabajaba en un periódico en la ciudad de Bucaramanga, el cual se llamaba Vanguardia Liberal y al cambio de la normatividad de la ley de pensiones, reunieron a los trabajadores y les presentaron a algunas de las empresas que ofertaban el cambio de régimen, y en dicho momento fue cuando se trasladó sin recordar la fecha exacta; que se afilió a PROTECCIÓN S.A. debido a la sugerencia que les dio la empresa donde trabajaba; que la asesoría no fue de forma personalizada, fue más una asesoría de tema comercial para captar clientes; que aparte de mencionarle que se podría pensionar con más dinero, más joven y en cualquier momento, no recuerda que se le brindara más información con respecto del traslado; que en el año 2002 en marzo, se trasladó a COLFONDOS S.A. y como en el anterior fondo no se le brindó información de las ventajas de pertenecer al régimen de ahorro individual; y que al momento de firmar los formularios no sabía que se estaba cambiando de régimen pensional.

De lo antepuesto no se deriva –entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Debe indicarse además que no se convalida la afiliación al RAIS con los traslados dentro del mismo régimen, compartiéndose el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral en múltiples providencias como la SL 5280 del 3 de noviembre de 2021, rad. 85801 en la que sostuvo claramente que *“... los traslados posteriores de un afiliado no pueden convalidar la actuación viciada en el traslado inicial, y como se ratificó en la sentencia CSJ SL1688-2019, las falencias en el suministro de información completa, veraz y efectiva sobre las consecuencias de un traslado, que pueden ocasionar su ineficacia, se deben examinar en el momento mismo del traslado y no con posterioridad”*.

Asimismo, tampoco puede tenerse en cuenta el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frente al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito *“... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía***

de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado "... *aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...*".

Dijo además en esa providencia, que:

"Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión deberá ser **CONFIRMADA** en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que la señora SONIA DIAZ MANTILLA estuvo vinculada a cada entidad.

Todo lo anterior sin que resulte procedente la indexación según se solicita en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia por COLPENSIONES, pues se trata de una cuestión que debió plantearse en la contestación de la demanda o cuando menos en el recurso de apelación, de manera que una decisión en tal sentido implicaría decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta procedente en sentencias de segunda instancia.

En lo que tiene que ver con la orden del a quo, de reintegrar a COLPENSIONES el bono pensional que se pudiera haberse pagado a favor de la actora, tal decisión resulta desacertada, toda vez que al ser ineficaz la afiliación de la demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES, por lo que tal orden será ***precisada***.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA y PRECISADA**.

Sin costas en esta instancia

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, 2 de diciembre de 2022, pero **PRECISANDO** que en el evento tal que se hubiese pagado bono pensional tipo A, en favor de la demandante, la devolución del importe de este debe efectuarse al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a

COLPENSIONES. Respecto del importe de bono pensional distinto al tipo A, se confirma que debe ser entregado a COLPENSIONES.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5f5f578ffd5077deaf74a1a5171328fa708c7b16e6882f448c425c347c2278a6**

Documento generado en 02/08/2023 03:12:08 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>